

268-A-17

TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL: San Salvador, a las doce horas del día diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.

Por agregado el informe de fecha trece de febrero del presente año, suscrito por el instructor Eduardo Alfonso Alvarenga Mártir, en el que solicita ampliación del plazo probatorio en el presente procedimiento (fs. 53 y 54).

El presente procedimiento se tramita contra el señor Miguel Ángel Martínez Ramírez, ex Técnico Vinculador de Catastro de la Oficina de Mantenimiento Catastral del Centro Nacional de Registros (CNR) del departamento de Santa Ana, a quien se le atribuye la infracción a la prohibición ética regulada en el artículo 6 letra g) de la Ley de Ética Gubernamental –en lo sucesivo LEG–, por cuanto en el año dos mil quince habría aceptado realizar un trabajo particular consistente en el levantamiento catastral de un plano topográfico de segregación de seis porciones más el resto, sobre un inmueble propiedad de la señora [REDACTED], por el que habría cobrado la cantidad de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$400.00); trabajo que estaría directamente vinculado con los servicios prestados por la institución para la que trabajaba y para el cual en su elaboración habría utilizado los conocimientos técnicos adquiridos en el área de catastro del CNR, documento que posteriormente debía ser sometido al conocimiento y consideración de dicho ex servidor público, en calidad de Técnico Vinculador Catastral de la Oficina de Mantenimiento Catastral del CNR del departamento de San Ana (fs. 15 al 18).

Al respecto, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

I. De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 762, publicado en el Diario Oficial N° 209, Tomo 417 de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, a partir del día treinta y uno de enero de dos mil dieciocho se encuentran vigentes las Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la Administración Pública (DTPARAP), en virtud de las cuales “El procedimiento administrativo deberá concluirse por acto o resolución final en el plazo máximo de noventa días posteriores a su iniciación, haya sido esta de oficio o a petición del interesado...” (art. 5 inciso 2°).

Adicionalmente, el artículo 7 letra b) de las DTPARAP refiere que vencido el plazo máximo para dictar resolución expresa en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, se producirá caducidad. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de la prescripción.

La caducidad se define como “una forma de terminación anticipada del procedimiento a causa de su paralización” (Marcos Gómez Puente, *La Inactividad de la Administración*, pág. 550).

En otros términos, “la caducidad o perención es una figura jurídica que, con fundamento en los principios administrativos de eficacia, eficiencia, celeridad e impulso procesal tiene como fundamento la inactividad o dilación en la tramitación de un procedimiento (Javier Rodríguez Ten, *Deporte y Derecho Administrativo Sancionador*, p. 237).

Así, el legislador estableció como consecuencia jurídica ante la superación del plazo máximo dispuesto para que la Administración Pública concluya el procedimiento, la caducidad del mismo por ministerio de ley.

En el caso particular, se advierte que la resolución de apertura del procedimiento fue notificada al investigado, señor Miguel Ángel Martínez Ramírez, el día once de julio del año dos mil dieciocho (f. 49), por lo que al haberse superado el plazo máximo para emitir la resolución final, corresponde declarar la caducidad del procedimiento.

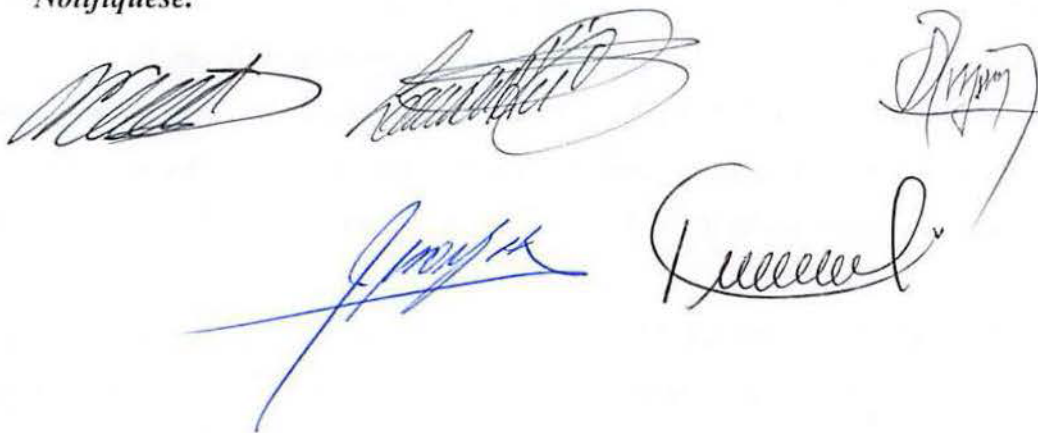
II. En razón del decreto de caducidad que se emitirá, este Tribunal considera improcedente acceder a la petición realizada por el licenciado Eduardo Alfonso Alvarenga Mártir, referente a la ampliación del plazo probatorio en el presente procedimiento.

Por tanto, y con base en lo establecido en las disposiciones legales citadas, este Tribunal **RESUELVE:**

a) *Declárase la caducidad* del presente procedimiento administrativo sancionador; en consecuencia, archívense las diligencias, de conformidad con lo dispuesto en el considerando I de la presente resolución.

b) *Declárase improcedente* la petición del licenciado Eduardo Alfonso Alvarenga Mártir, instructor de este Tribunal, referente a la ampliación del plazo probatorio en el presente procedimiento, en virtud de lo expuesto en el considerando II de esta resolución.

Notifíquese.



PRONUNCIADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL QUE LO SUSCRIBEN

